

La izquierda vs. la democracia venezolana

www.360geopolitica.org

Desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, un ecosistema transnacional de gobiernos de izquierda, think tanks y ONG ha protegido al régimen venezolano con cobertura ideológica y respaldo político. Durante más de dos décadas, alegó neutralidad bajo el disfraz de la ideología. En 2025, esa ficción se volvió indiscutible.

El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado marcó un momento de verdad. En lugar de celebrar una clara victoria de la resistencia democrática y los derechos humanos, muchas de estas mismas instituciones respondieron con hostilidad coordinada.

Su reacción fue reveladora. Al atacar a una laureada con el Nobel cuya lucha ha sido explícitamente pacífica y democrática, mostraron su verdadera alineación: no con el pueblo venezolano, sino con el sistema autoritario que lo oprime. Esta reacción sirvió como confirmación definitiva de que la lealtad ideológica ahora pesa más que los principios democráticos dentro de amplios sectores de la izquierda internacional.

Maduro gobierna Venezuela desde 2013, tras la muerte de Chávez, reivindicando continuidad con el chavismo y el socialismo. En la práctica, su mandato se ha definido por la concentración sistemática de poder en el ejecutivo, la erosión de los controles institucionales y la normalización del miedo como herramienta de gobierno. La Venezuela de hoy no es una democracia defectuosa; es un Estado autoritario con liderazgo "civil".

Las elecciones continúan realizándose, pero carecen de las condiciones mínimas para una competencia política real. Observadores internacionales, partidos de oposición y algunas organizaciones de derechos humanos documentan de manera consistente manipulación electoral, descalificación de candidatos y captura institucional. La Asamblea Nacional controlada por la oposición fue neutralizada mediante instituciones paralelas y maniobras judiciales,

eliminando la supervisión efectiva del poder ejecutivo.

Las consecuencias económicas han sido catastróficas. Hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, colapso de la moneda y pobreza masiva han devastado la vida diaria. La dependencia estructural del petróleo, agravada por la corrupción, la mala gestión y la caída de la producción, vació la economía. Las sanciones internacionales –particularmente de Estados Unidos– han restringido aún más los ingresos, pero no causaron el colapso; solo expusieron y agravaron un modelo económico ya fallido.

Los abusos de derechos humanos son sistemáticos. Líderes de la oposición enfrentan arresto, exilio o prohibiciones políticas. Las protestas se criminalizan y la libertad de prensa está fuertemente controlada. Las fuerzas de seguridad son acusadas repetidamente de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y violaciones graves. El régimen desestima estas denuncias como medidas necesarias para preservar el orden, reforzando un patrón de represión más que de rendición de cuentas.

A pesar de este historial, Maduro mantiene respaldo internacional de países como Rusia, China, Cuba, Irán, España y Colombia. Mientras tanto, más de nueve millones de venezolanos han abandonado el país, generando una de las mayores crisis migratorias de la historia moderna. Sus defensores presentan a Maduro como un defensor de la soberanía frente a la intervención extranjera; los críticos identifican acertadamente a un régimen que ha desmantelado la democracia, destruido las oportunidades económicas y generado un sufrimiento humano inmenso.

La Venezuela de hoy representa más que autoritarismo. Bajo Chávez y Maduro, el Estado ha impulsado un modelo híbrido peligroso, mejor descrito como *populismo criminal*¹ –un sistema en el que el poder político se sostiene mediante alianzas con el crimen organizado transnacional.

¹ El populismo no existe en el vacío. En Venezuela y Colombia, es inseparable de los grupos armados ilegales y del crimen organizado.

Desde sus primeros años, la supervivencia del régimen dependió de organizaciones criminales colombianas como las FARC y el ELN, profundamente implicadas en narcotráfico, secuestro, extorsión y tráfico de personas. Con el tiempo, Venezuela se convirtió en un refugio global para actores ilícitos, incluidos Hezbollah, Hamas e importantes cárteles de droga mexicanos y ecuatorianos. Estos grupos proveen al régimen *flujos de ingresos alternativos*, capacidad de coerción y mecanismos para evadir sanciones.

El equilibrio regional cambió aún más en agosto de 2022. Con la elección del presidente colombiano Gustavo Petro, Maduro ganó un aliado crítico. La iniciativa “Paz Total” de Petro ha replicado efectivamente el modelo venezolano en Colombia al legitimar a grupos armados ilegales y al crimen organizado como interlocutores políticos. En lugar de dismantelar el poder criminal, la política lo ha incorporado en las negociaciones estatales.

Esta arquitectura criminal-estatal persiste porque está protegida internacionalmente. Una red coordinada de gobiernos de izquierda, ONG y plataformas intelectuales continúa brindando cobertura diplomática y narrativa, desafiando abiertamente a Estados Unidos y a decenas de democracias que rechazan la legitimidad de Maduro. La solidaridad ideológica ha reemplazado la rendición de cuentas democrática, prolongando la crisis humanitaria venezolana y obstaculizando la justicia.

Los recientes comentarios europeos que sugieren que las sanciones estadounidenses al tránsito de petróleo son ineficaces no resisten un análisis riguroso. Expertos regionales que rastrean la logística y los flujos financieros reportan tensiones significativas en las operaciones del régimen. Igualmente, preocupante es la falta de transparencia sobre los “expertos” citados en estas narrativas, muchos de los cuales están vinculados directamente al eje Maduro-Petro-Putin.

Millones de dólares se están invirtiendo ahora en operaciones coordinadas de influencia en Estados Unidos y Europa para debilitar las sanciones mediante desinformación estratégica. La convergencia del crimen organizado y el poder estatal en América ha generado una amenaza de seguridad hemisférica.

Grupos como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua no son fenómenos criminales aislados; son componentes estructurales de un sistema transnacional de gobernanza criminal. Negar su rol es una cortina de humo política.

Estas organizaciones ejercen autoridad *de facto* en vastos territorios. La política colombiana de “Paz Total” los trata como actores políticos en lugar de amenazas criminales, otorgándoles legitimidad mientras las víctimas siguen pagando el costo.

El Cartel de los Soles funciona como centro de comando estratégico –coordinando narcotráfico, contrabando de armas, tráfico de personas y redes financieras. *El Tren de Aragua* opera como brazo de coerción, expandiendo el control territorial en la región en coordinación con el ELN, disidentes de las FARC y la Segunda Marquetalia. Juntos forman la columna vertebral operacional del eje criminal Maduro-Petro.

Estos actores no son dismantelados; son instrumentalizados. Las organizaciones criminales se usan para control territorial, apalancamiento político e influencia regional, socavando la soberanía estatal, erosionando las instituciones democráticas y normalizando la gobernanza criminal bajo la apariencia de negociación.

Defender la democracia y el estado de derecho debe tener absoluta prioridad sobre la alineación ideológica. Cuando el compromiso se interpreta como legitimidad, los regímenes criminales ganan poder, las instituciones democráticas colapsan y el sufrimiento humano se acelera. Venezuela ya no es solo una catástrofe nacional; es una advertencia regional inconfundible.

El proyecto Maduro-Petro representa el populismo criminal en su forma más clara: gobernanza sostenida por grupos armados ilegales y crimen organizado.

Bogotá, Colombia, 10 de enero de 2026.